DOCUMENTO CENTRAL

ACERCA DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE BOLIVIA (Julio 2026)



Mgr. Oscar Zegada Claure
Docente Investigador Asociado al IESE
Facultad de Ciencias Económicas — UMSS

Al mes de julio de 2026, Bolivia no halla salida a la profunda crisis económica, política y social que, sin poder resolverse por el gobierno actual, ha generado un escenario de alta conflictividad, incertidumbre y paralización parcial de la economía nacional, lo que ha profundizado los problemas estructurales irresueltos durante los últimos años.

El escenario actual no puede entenderse únicamente como una desaceleración económica o una disputa política coyuntural. Se trata de una situación en la que convergen –interactuando- desequilibrios macroeconómicos persistentes, creciente fragmentación del sistema político, conflictos sociales recurrentes y deterioro de las condiciones de vida de la población. Los bloqueos, las movilizaciones y la conflictividad política han tenido efectos negativos sobre la producción, el comercio, el abastecimiento y la inversión, agravando las dificultades de una economía que ya enfrentaba restricciones externas y fiscales importantes. Paralelamente, la desestructuración y pérdida de legitimidad del sistema político ha reducido la capacidad del estatal para adoptar decisiones estratégicas orientadas a superar la crisis. El resultado es un círculo vicioso: la inestabilidad política, social e institucional impone límites a las reformas económicas necesarias y la falta de estas profundiza la crisis política, social e institucional.

El presente análisis ofrece una síntesis de la coyuntura económica y política de Bolivia a julio de 2026, identificando los principales problemas inmediatos y los desafíos estructurales que el país debe enfrentar para recuperar la estabilidad y construir un modelo de desarrollo sostenible e incluyente.

Una característica esencial de la coyuntura actual es la ausencia de una resolución efectiva de la crisis económica, política y social. Lejos de observarse señales claras de recuperación, los bolivianos percibimos la persistencia e incluso agudización de un crítico contexto de elevada incertidumbre. Los prolongados conflictos sociales y bloqueos han tenido consecuencias negativas en la actividad económica. La interrupción del transporte de mercancías y personas, el desabastecimiento temporal de diversos productos y el incremento de costos logísticos han afectado tanto a consumidores como a productores. Además, las tensiones políticas han debilitado las perspectivas de inversión privada y limitado las posibilidades de recuperación económica.

La interacción entre crisis política y crisis económica genera un círculo perverso: la debilidad institucional del sistema político dificulta la adopción de políticas económicas eficaces, mientras que el deterioro económico incrementa el descontento social y profundiza la inestabilidad política, social e institucional.

La dimensión política

Uno de los elementos centrales de la coyuntura es el progresivo debilitamiento de la gobernabilidad, acompañada de un prematuro desgaste de legitimidad del gobierno de Rodrigo Paz, que en sus primeros meses de gobierno no ha logrado consolidar respaldo social ni parlamentario

suficiente para sus tímidas medidas de ajuste que son rechazadas por muchos sectores, reduciendo considerablemente su margen de maniobra.

En paralelo, las organizaciones sociales y corporativas muestran una creciente fragmentación. Diversos sectores actúan de manera autónoma, con agendas específicas y, en muchos casos, con intereses contrapuestos. Esta dispersión reduce la capacidad de construir consensos nacionales y dificulta la formulación de políticas públicas de alcance general.

Otro rasgo importante es la crisis del sistema político surgido durante el ciclo neoestatista del Movimiento al Socialismo. El debilitamiento y reconfiguración de liderazgos, las disputas internas y la pérdida de cohesión de los principales actores políticos han abierto un escenario de transición cuya dirección aún resulta incierta.

En este contexto, el Gobierno ha privilegiado acuerdos y negociaciones sectoriales para enfrentar conflictos inmediatos. Si bien estas estrategias han permitido reducir temporalmente algunas tensiones, también han limitado el margen de implementación de reformas estructurales, muchas de las cuales podrían implicar costos políticos de corto plazo. En este contexto vale la pena preguntarse si el gobierno -pese a su debilidad política- podrá aprovechar la fragmentación política, corporativa y social, así como la debilidad de las fuerzas opositoras, para comenzar a construir una opción real de reconfiguración política que dé mínimas condiciones políticas para avanzar en las reformas económicas imprescindibles.

Sin embargo, no hay que olvidar que la misma crisis podría abrir oportunidades para una reconfiguración del sistema político boliviano en la medida en que emerjan nuevos liderazgos, se reorganicen las fuerzas políticas y se encuentren mecanismos para la búsqueda de consensos.

Una interrogante adicional consiste en determinar si existirán las condiciones políticas necesarias para impulsar las reformas económicas que el país requiere. Diversas experiencias internacionales muestran que los procesos de ajuste y estabilización macroeconómica, que abren caminos para la transformación productiva, necesitan mínimos niveles de legitimidad política y acuerdos sociales relativamente amplios.

En este marco adquiere relevancia la consideración de lo que sucede en determinadas áreas territoriales donde la presencia efectiva del Estado enfrenta importantes limitaciones. Lo que se vive cotidianamente en varios lugares del país, en particular en el trópico de Cochabamba, plantea interrogantes sobre la capacidad estatal para ejercer plenamente sus funciones institucionales, garantizar el cumplimiento de la ley, el orden público y el ejercicio de su autoridad legal. Este constituye un tema de análisis relevante en el marco de la histórica debilidad del Estado en Bolivia.

La dimensión económica

La economía boliviana continúa enfrentando importantes desequilibrios macroeconómicos. Uno de los principales problemas está en el sector externo, y se expresa en la escasez de divisas y los bajos niveles de las reservas internacionales netas. Esta situación limita la capacidad del Estado para atender obligaciones externas, estabilizar el mercado cambiario y generar confianza entre los agentes económicos. En este contexto -más allá de las especulaciones oraculares cotidianas tan de moda de economistas y opinadores de todo tipo- surgen interrogantes respecto a los efectos del nuevo régimen cambiario en la producción y el empleo, en el comportamiento de los desequilibrios externos, en la evolución de los precios internos y en el funcionamiento del mercado de divisas. La magnitud de estos efectos dependerá de la consistencia de la política económica y de la capacidad institucional para administrar el proceso de ajuste.

Otro problema persistente es el elevado déficit fiscal, acompañado por un creciente endeudamiento público principalmente externo, que incrementa las restricciones fiscales futuras y reduce el espacio para políticas expansivas que ayuden al crecimiento económico en el corto plazo, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y desequilibrar el mercado de divisas.

La actividad económica muestra señales de contracción en casi todos los sectores. La baja en

el consumo, la disminución de las inversiones, las dificultades de abastecimiento y la ya señalada incertidumbre política afectan negativamente a los sectores tanto formal como informal, deteriorando el empleo, limitando su generación y contrayendo los ingresos de numerosas familias.

Mientras, la inflación -que según el gobierno llegará a "dos dígitos" este año- continúa siendo uno de los principales factores de deterioro de los ingresos reales de la gente. El incremento de precios, particularmente de los alimentos, afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, reduce su poder adquisitivo y aumenta su vulnerabilidad económica, lo que contribuye a incrementar la conflictividad social, así como la incertidumbre económica y política.

La crisis energética y de abastecimiento de combustibles se ha profundizado, generando escasez intermitente, especulación, mayor incertidumbre y negativos efectos en el transporte, la producción y los servicios. Más allá de los problemas coyunturales de distribución de diésel y gasolina, la situación refleja restricciones estructurales relacionadas con la producción, la importación, los subsidios y la sostenibilidad del sistema energético nacional.

Frente a este panorama, Bolivia enfrenta diversos desafíos de corto y largo plazo cuya atención resulta prioritaria para evitar un mayor deterioro económico y social.

Los desafíos de corto plazo

En lo inmediato, un primer desafío inmediato es concretar un reacomodo macroeconómico que permita recuperar la estabilidad y restablecer condiciones mínimas para un crecimiento sostenido. Llevarlo adelante requiere políticas fiscales, monetarias y cambiarias consistentes, orientadas a reducir los desequilibrios sin profundizar innecesariamente los costos sociales del ajuste.

En segundo lugar, es indispensable construir un entorno político mínimo que garantice condiciones básicas de gobernabilidad. La estabilidad política constituye un requisito fundamental para recuperar la confianza de inversionistas, productores y ciudadanos, así como para facilitar la implementación de reformas.

Un tercer desafío consiste en evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de la población. La protección de los sectores más vulnerables mediante políticas sociales focalizadas será fundamental para amortiguar los efectos de la crisis y preservar la cohesión social.

Finalmente, resulta prioritario reducir los niveles de conflictividad social. Los bloqueos, conflictos y enfrentamientos no solo generan costos económicos, sino que también profundizan la polarización política dificultando la búsqueda de soluciones consensuadas.

Los desafíos estructurales de largo plazo

Más allá de las urgentes tareas inmediatas, Bolivia tiene delante transformaciones estructurales que definirán su desarrollo durante las próximas décadas. En este ámbito, el primer gran desafío consiste en avanzar hacia un nuevo ciclo de acumulación. Esto implica superar gradualmente el patrón de desarrollo extractivista primario exportador y avanzar hacia una economía más diversificada, con mayor productividad, generación de valor agregado y sostenibilidad ambiental. La diversificación productiva es una condición indispensable para reducir la vulnerabilidad frente a los cambiantes mercados internacionales de bienes primarios.

Un segundo desafío es el rediseño y fortalecimiento institucional. La consolidación de un Estado moderno requiere instituciones sólidas y transparentes que permitan la formulación de políticas públicas de largo plazo. En este sentido, la construcción de un pacto nacional que trascienda intereses partidarios y personalistas, constituye una condición necesaria para avanzar hacia un proyecto compartido de Estado-Nación.

Un tercer aspecto se refiere a la dimensión ética del desarrollo. Las transformaciones institucionales y económicas requieren también una profunda reforma moral, tanto individual como colectiva, basada en principios de responsabilidad, legalidad, transparencia, respeto por las instituciones y compromiso con el bien común. Sin un fortalecimiento de la cultura cívica y de la confianza social, las reformas estructurales difícilmente podrán consolidarse.

En suma, como se habrá podido apreciar, la coyuntura boliviana de mediados del año 2026 refleja la convergencia de problemas económicos, políticos e institucionales que se retroalimentan mutuamente en una suerte de círculo vicioso. La persistencia de desequilibrios macroeconómicos, la contracción de la actividad productiva, la inflación, la escasez de divisas y la crisis energética alimentan tanto la crisis política como la creciente limitación del Estado de formular e implementar políticas y construir consensos, lo que a su vez traba las soluciones a los problemas económicos. Pero, además, limitar las respuestas al corto plazo implica postergar las transformaciones estructurales que Bolivia necesita. Entonces en el momento presente, para enfrentar tanto el reacomodo macroeconómico de corto plazo como avanzar hacia un nuevo ciclo de desarrollo de largo plazo hay una condición indispensable que debe ser cumplida: concretar un *Pacto Nacional para la Gobernabilidad*, orientado al diseño e implementación de políticas de Estado consensuadas, estables y continuas. Sin un acuerdo mínimo entre fuerzas políticas y sociales, cualquier esfuerzo parcial será insuficiente. Por esta razón nuestro mayor desafío es pasar de los esfuerzos fragmentados de gestión de la emergencia a la construcción de un proyecto nacional compartido. Caso contrario el país seguirá empantanado en su círculo histórico de mediocridad del que no puede salir hace 200 años.

DOCUMENTO CENTRAL

FORO ECONÓMICO DE LA FCE-UMSS

ACERCA DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE BOLIVIA (JULIO DE 2026)

Autor: Oscar Zegada Claure
Foro Económico – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Mayor de San Simón (UMSS)



Al mes de julio de 2026, Bolivia no halla salida a la profunda crisis económica, política y social. Convergen desequilibrios macroeconómicos persistentes, fragmentación política, conflictos sociales recurrentes y deterioro de las condiciones de vida. Los bloqueos y tensiones han paralizado la economía y debilitado la capacidad del Estado. Se genera un círculo vicioso: la inestabilidad política y social limita las reformas económicas necesarias y su ausencia profundiza la crisis.

IDEA CENTRAL

Bolivia necesita pasar de la gestión de la emergencia a la construcción de un proyecto nacional compartido, mediante un Pacto Nacional para la Gobernabilidad y políticas de Estado estables y consensuadas.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA COYUNTURA ACTUAL

- Conflictividad social y bloqueos
- Paralización parcial de la economía
- Desequilibrios macroeconómicos persistentes
- Deslegitimación y desestructuración del sistema político
- Deterioro de las condiciones de vida de la población

CÍRCULO VICIOSO: La crisis política, social e institucional impone límites a las reformas económicas necesarias y su ausencia profundiza la crisis política, social e institucional.

2. DIMENSIÓN POLÍTICA

- Debilitamiento de la gobernabilidad y prematuro desgaste de legitimidad del gobierno de Rodrigo Paz.
- Fragmentación de organizaciones sociales y corporativas: actúan de manera autónoma, con agendas e intereses contrapuestos.
- Crisis del sistema político surgido en el ciclo neoestatista del MAS: disputas internas y pérdida de cohesión.
- Gobierno privilegia acuerdos sectoriales: alivian tensiones inmediatas pero limitan reformas estructurales.
- **Interrogante clave:** ¿Existirán condiciones políticas para impulsar las reformas económicas que el país requiere?

Importante limitación de la presencia efectiva del Estado en varias áreas territoriales (ej. trópico de Cochabamba), lo que debilita la autoridad, el orden público y el cumplimiento de la ley.

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

SECTOR EXTERNO
Escasez de divisas y bajas RIN* que limitan la capacidad del Estado para atender obligaciones externas y estabilizar el mercado cambiario.

*RIN: Reservas Internacionales Netas

DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA
Elevado déficit fiscal y creciente endeudamiento externo que restringen el espacio fiscal y comprometen la sostenibilidad.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Contracción en casi todos los sectores: bajo consumo, menor inversión, dificultades de abastecimiento e incertidumbre política.

INFLACIÓN
Llegará a "dos dígitos" este año: erosiona ingresos reales, golpea más a los hogares de menores ingresos y eleva la conflictividad.

CRISIS ENERGÉTICA Y COMBUSTIBLES
Escasez intermitente, especulación y altos costos que afectan transporte, producción y servicios. Refleja restricciones estructurales.

4. DESAFÍOS DE CORTO PLAZO

1 REACOMODO MACROECONÓMICO
Recuperar la estabilidad mediante políticas fiscales, monetarias y cambiarias consistentes que reduzcan desequilibrios con menores costos sociales.

2 ENTORNO POLÍTICO MÍNIMO
Garantizar condiciones básicas de gobernabilidad para recuperar la confianza e impulsar reformas.

3 PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES
Políticas sociales focalizadas para amortiguar los efectos de la crisis y preservar la cohesión social.

4 REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Disminuir bloqueos y enfrentamientos para evitar mayores costos económicos y avanzar hacia soluciones consensuadas.

5. DESAFÍOS ESTRUCTURALES DE LARGO PLAZO

1 NUEVO CICLO DE ACUMULACIÓN
Superar el modelo extractivista primario exportador y avanzar hacia una economía diversificada, productiva, con valor agregado y sostenibilidad ambiental.

2 REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Construir instituciones sólidas, transparentes y un pacto nacional que trascienda intereses partidarios y personalistas, para consolidar un proyecto compartido de Estado-Nación.

3 DIMENSIÓN ÉTICA DEL DESARROLLO
Profunda reforma moral individual y colectiva basada en responsabilidad, legalidad, transparencia, respeto a las instituciones y compromiso con el bien común.

6. CONCLUSIÓN

La coyuntura boliviana de julio de 2026 refleja la convergencia de problemas económicos, políticos e institucionales que se retroalimentan en un círculo vicioso.

La persistencia de desequilibrios, la contracción productiva, la inflación, la escasez de divisas y la crisis energética alimentan la crisis política y la limitada capacidad estatal para implantar políticas y construir consensos, lo que traba las soluciones.

Caso contrario, el país seguirá empantanado en su círculo histórico de mediocridad del que no puede salir hace 200 años.

CONDICIÓN INDISPENSABLE:
PACTO NACIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD
Políticas de Estado consensuadas, estables y continuas.

Nuestro mayor desafío es pasar de los esfuerzos fragmentados de gestión de la emergencia a la construcción de un proyecto nacional compartido.